

El país se encuentra en un callejón sin salida: después de treinta años de políticas neoliberales el saldo ha sido de una débil y cuestionable estabilidad macroeconómica, a costa de una muy baja capacidad de crecimiento (2.4 por ciento de crecimiento entre 1981 y 2011). Esta situación ha conformado un mosaico nacional de gran heterogeneidad con altos niveles de pobreza (46.2 por ciento de la población en 2010 según datos de CONEVAL), creciente desigualdad del ingreso (la relación de ingresos entre el decil más alto y el más bajo es de 25 a 1 según la ENIGH de 2010), falta de oportunidades para los jóvenes (más de 6 millones de niños y jóvenes sin derecho a educación en 2010 según UNICEF), desempleo e informalidad (aproximadamente el 60 por ciento de la población es ocupada en el sector informal), rampante corrupción (de los más corruptos del mundo, ocupa el lugar 105 de 176 países de acuerdo al índice de corrupción 2012 de Transparencia Internacional), creciente violencia (más de 20 mil asesinatos al año y decenas de desaparecidos), entre otros muchos problemas.

Incluso el sueño de un país de clase media, con el que se ha querido destacar a México con relación a otras economías, se ha desvanecido: el INEGI ha planteado que nuestro país se compone de una mayoría poblacional del 59.1 por ciento en la "clase baja", el 39.2 por ciento en la "clase media" y sólo una minoría del 1.7 por ciento en la "clase alta" (<http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Especiales/2013/junio/comunica6.pdf>).

Pese a este saldo negativo, desde la presidencia Peña Nieto y los partidos que secundan al PRI en el Pacto por México han estado proponiendo nuevas reformas, las cuales se han centrado en la desregulación del trabajo, la educación, telecomunicaciones, finanzas y banca. Están por formularse nuevas propuestas de reforma en aspectos muy polémicos como son la hacienda y la energética.

Pese a la recepción positiva que esas iniciativas han tenido por parte de algunos grupos empresariales y sobre todo por organismos internacionales conservadores como la OCDE, organismo que prevé un crecimiento sostenido en los próximos 10 años del 5 por ciento si se concluyen las reformas (<http://www.elfinanciero.com.mx/component/content/article/44-economia/18124-mexico-crecerea-50-con-reformas-y-mejoras-regulatorias-ocde.html>), la realidad es terca y hoy nuevamente el futuro económico del país es incierto frente a una nueva desaceleración de la economía; la meta de crecimiento del 3.5 por ciento para 2013 se ha reajustado a menos del 3 por ciento.

Las reformas propuestas se encuentran restringidas por la camisa de fuerza impuesta por una ideología neoliberal conservadora, que busca priorizar mecanismos de mercado y limita la intervención pública en la economía. El neoliberalismo en un solo país parece ser la máxima que inspira a los estrategas mexicanos de la escalada de estas nuevas reformas y los ejemplos contrarios que se han presentado en América Latina en países como Argentina, Brasil, Ecuador,

Bolivia y Venezuela, son omitidos e incluso criticados. Sin embargo, las explosiones de protesta que han estallado en diferentes partes del mundo, frente a cuestiones que podrían minimizarse como la destrucción de un parque en Estambul o el aumento al precio del transporte en Brasil, muestran que el país podría también estar convirtiéndose en una olla de presión a la cual bastaría moverle un poco la tapa para hacerlo volar en pedazos. Por ello, en este número del *Boletín* nos hemos dado a la tarea de reflexionar sobre el proceso de reformas emprendidas por el gobierno actual y evaluar los riesgos de seguir profundizando un proceso iniciado hace treinta años con saldos más negativos que positivos, sobre todo en el bienestar de la población de las diferentes regiones mexicanas.